**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
CUNDINAMARCA
SALA CIVIL - FAMILIA**

MAGISTRADO PONENTE	: PABLO IGNACIO VILLATE MONROY
CLASE PROCESO	: RENDICIÓN DE CUENTAS
DEMANDANTE	: JOSÉ GUILLERMO CALVO HOLGUÍN Y OTROS
DEMANDADO	: TRANSPORTES Y AGREGADOS J.H. S.A.S.
RADICACIÓN	: 25875-31-03-001-2016-00251-02
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO

Bogotá D.C., cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

Decide el Tribunal a continuación el recurso de apelación formulado por la parte demandada a través de su apoderado, contra la providencia proferida en audiencia por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta, el día 24 de agosto de 2023, a través del cual se resolvió la objeción a la rendición de cuentas.

I. ANTECEDENTES:

1. Los demandantes JOSE GUILLERMO CALVO HOLGHÍN, EVA PÉREZ VIUDA DE BELTRÁN, HUGO JAVIER CALVO PÉREZ y ANA ELIZABETH CALVO PÉREZ solicitaron la rendición de cuentas a la sociedad TRANSPORTES Y AGREGADOS J.H. S.A.S., con fundamento en el contrato de operación minera suscrito entre las partes el 8 de junio del año 2013, dado que la demandada no ha rendido cuentas de toda la explotación y la comercialización de los minerales extraídos con ocasión del citado contrato, por cuanto los demandantes solo recibieron unos

pocos informes en Excel que no fueron claros y sin los respectivos soportes (página 41 archivo 1).

2. En sentencia del 5 de diciembre de 2018, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta ordenó a la demandada rendir cuentas a los demandantes, dado que *“no se advierte de la prueba acopiada al proceso que, en efecto, durante todo el término que estuvo el operador en el predio de los demandantes, entregó las cuentas deprecadas”*, cuentas que debía rendir dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia (páginas 64 y 65 archivo 3 C-1 y audio 3 carpeta Audiencia 373 C-1), sentencia confirmada por este Tribunal en providencia de fecha 22 de abril de 2019 (páginas 79 archivo 3 C-1). La demandada presentó las cuentas ordenadas, anexando 7 AZ de soporte de gastos (páginas 86 a 101 C-3); de las cuentas rendidas se ordenó traslado a los demandantes por auto del 25 de julio de 2019 (página 105 archivo 3 C-1).
3. Los demandantes por medio de apoderada objetaron las cuentas rendidas por la sociedad demandada, indicando que la demandada no rindió cuentas, ya que lo que entregó fue una cantidad de fotocopias de facturas y gastos, y unos cuadros en Excel manifestado que reflejan ventas año a año, documentos que no cumplen con los requisitos exigidos por el C.Co., y el Estatuto Tributario; que no se evidenciaron estados financieros con sus respectivas notas contables de los años 2013 a 2016 firmados por el representante legal y contador; que no se evidenciaron las facturas de venta de todo el mineral comercializado por la demandada; que los demandantes no tuvieron acceso a la información contable y financiera ni conocieron el manejo de los recursos económicos producto de la venta de minerales; que no hay relación de facturas de venta solo de viajes lo que presume que la demandada no llevaba contabilidad; que los documentos aportados no tienen sustento contable ni jurídico y siendo la demandada una sociedad comercial estaba obligada a llevar contabilidad en debida forma; que la demandada presenta cuentas de cobros irreales; que la demandada no entregó estados financieros; que no se evidencia el pago del IVA; y que la demandada siempre ha manifestado que la operación solo dejó pérdidas sin ninguna prueba siquiera sumaria de ello (páginas 108 a 113 C-3).

4. Surtido el traslado de la objeción a ella se opuso la demandada alegando que la objeción no contiene los requisitos de ley; que el mineral calcita no existe dentro del polígono de la concesión minera, por lo que todos los esfuerzos para explotación y comercialización fueron infructuosos arrojando pérdidas; que los demás materiales “concesibles” no produjeron las utilidades que se esperaban, porque no estaba autorizada su venta, materiales que los demandantes de mala fe incluyeron en el contrato; que conforme a las obligaciones del contrato cumplió con la remisión de informes y rendición de cuentas; que Hugo Calvo a título personal vendía recebo y piedra y jamás aportó facturas; que el título minero no es de calcita sino de recebo de piedra, evidenciándose el daño del que fue víctima la demandada; que el error de digitación en el balance fue corregido ya que se adeuda al señor Santamaria y no al señor Naranjo; que son los demandantes los que deben a la demandada; que el juez debe acceder solo a lo que este probado; y que entre las partes curso proceso declarativo con radicado No. 2016-233 (páginas 181 a 185 C-3).

5. Tramitada la objeción, por auto del 18 de septiembre de 2019 se decretaron pruebas (página 203 C-3); practicadas las pruebas en audiencia del 24 de agosto de 2023 el señor juez a quo consideró que si bien el dictamen pericial rendido adolecía de algunas falencias en audiencia la perito designada absolvió el cuestionario que le hiciera tanto el juzgado como el apoderado de la demandada constatando que se habían cumplido satisfactoriamente todas las cargas que impone el legislador en esta materia para ser tenido en cuenta y valorado, máxime que éste no fue objetado; que si bien la demandada cuestionó que la perito se hubiera basado únicamente en la información que le suministró la parte demandante sin tratar de acudir a los estados financieros de la entidad y a los demás documentos contables, se debía tener en cuenta que para efectos de rendir el dictamen pericial se debía contar exclusivamente con la documentación que presentó la demandada, pues precisamente es la que, según ésta contiene las cuentas que debe rendir, por lo que el juzgado asume que precisamente en la documentación presentada por la demandada se encuentra absolutamente toda la documentación pertinente en orden a aclarar todas las circunstancias relacionadas con las actividades desplegadas por la demandada durante el lapso correspondiente; que la perito en su dictamen indicó que realmente no existe una rendición de cuentas por falta

de documentos relacionados con estados financieros conforme a la Ley 122 de 1995 y el artículo 774 del Estatuto Tributario; que rendir cuentas en proceso es mucho más que simplemente presentar un balance con sus partidas de activo y pasivo; que el verdadero cometido en esta clase de procesos es develar la realidad de las mismas; que es imposible pensar que el propósito del proceso se atienda con presentar la cuenta y no más; que no debe perderse de vista que la demandada es una sociedad comercial y, por lo tanto, su actividad debe sujetarse a las normas contenidas en el Código de Comercio y las leyes y reglamentos especiales que se dicten sobre la materia, lo cuales no observó; que en cuanto al informe de gestión únicamente aparece el memorial del apoderado de la demandada que no cumple con las exigencias legales; que satisfechos los requerimientos legales luego del cuestionario que realizara el juzgado a la perito, el dictamen se acoge plenamente por el juzgado, habida cuenta que es realizado por una profesional de la contaduría debidamente certificada, que cuenta con la idoneidad necesaria, además de la experiencia que tiene en revisoría fiscal, lo que la habilita perfectamente para determinar si se puede o no tener como rendición de cuentas la documental presentada por la demandada; que en conclusión la parte demandada se sustrajo de la presentación de rendición de cuentas. Por lo anterior, decidió aceptar la objeción presentada por la parte demandante frente a las cuentas que rindiera la demandada y condenó a la demandada a pagar a los demandantes en el término de 5 días a partir de la ejecutoria de esa decisión, \$300.000.000 como capital y la indexación del capital, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Banco de la República a partir del 9 de diciembre del año 2016, fecha de presentación de la demanda y hasta cuando se realice el correspondiente pago (archivos 43 y 44 C-1),

6. Contra esta decisión la demandada a través de su apoderado formuló recurso de apelación, argumentado que la controversia tiene que ver con un contrato de operación minera entre los demandantes y la demandada, sin que ello implique una sociedad, que los demandantes no son socios; que el origen de la litis no recae sobre una sociedad, sino de un contrato; que lo aportado por la demandada es prueba clara que demuestra los movimientos que tuvo la empresa respecto al contrato objeto de litis; que cumplió con su obligación contractual de aportar todo lo que implique ingresos y egresos originado en las obras; que el

dictamen pericial no cumple con los requisitos del artículo 226 del C.G.P., que la perito no cumplió con los requisitos antes previstos en la norma, además su falta de experticia se evidenció en la audiencia del 24 de agosto de 2023, cuando indica que “solo tuvo en cuenta lo aportado por la abogada”; que no manifestó bajo la gravedad del juramento que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional; que el dictamen no es claro, preciso, exhaustivo y detallado, y tampoco contiene fundamentos técnicos respecto a sus conclusiones; que el juzgado se refiere y confunde al aceptar como válida una prueba pericial que carece en lo absoluto no solo de sustento técnico y científico, si no de experticia por parte de la perito; que no se valoró en debida forma el informe de gestión y estados financieros presentados; tampoco se valoró la prueba trasladada ni los soportes contables; y que la sociedad demandada rindió las cuentas en la forma acordada dentro del contrato de concesión; que se debe tener en cuenta que el objeto del contrato era obtener CALCITA, la cual nunca se encontró; y que la demandada subsidio gastos con bienes propios de la sociedad al punto que hoy está en estado de liquidación (archivo 45 C-1).

Concedido el recurso de apelación, procede el Tribunal a resolverlo.

II. CONSIDERACIONES:

La rendición provocada de cuentas, se encuentra regulada en el artículo 379 del Código General del Proceso que reza:

“Art. 379.- En los procesos de rendición de cuentas a petición del destinatario se aplicarán las siguientes reglas:

1. El demandante deberá estimar en la demanda, bajo juramento, lo que se le adeude o considere deber. En este caso no se aplicará la sanción del artículo 206.
2. Si dentro del término del traslado de la demanda el demandado no se opone a rendir las cuentas, ni objeta la estimación hecha por el demandante, ni propone excepciones

previas, se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito ejecutivo.

3. Para objetar la estimación el demandado deberá acompañar las cuentas con los respectivos soportes.

4. Si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, sobre ello se resolverá en la sentencia, y si en ésta se ordena la rendición, se señalará un término prudencial para que las presente con los respectivos documentos.

5. De las cuentas rendidas se dará traslado al demandante por el término de diez (10) días en la forma establecida en el artículo 110. Si aquél no formula objeciones, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a favor de cualquiera de las partes. Este auto no admite recurso y presta mérito ejecutivo.

Si el demandante formula objeciones, se tramitarán como incidente y en el auto que lo resuelva se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago.

6. Si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar lo estimado en la demanda.”

Como se observa, el proceso de rendición de cuentas comporta dos etapas sobre las cuales la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia AC2038-2020, de 7 de septiembre de 2020, radicado No. 11001-02-03-000-2020-01336-00, M.P. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo, expuso:

“Ahora bien, sobre las particularidades de ese proceso, sus fases y las decisiones que se adoptan en cada una de ellas, la Corte ha indicado que

*«De manera que, si tal proceso tiene como finalidad establecer, de un lado, la obligación legal o contractual de rendir cuentas, y de otro, determinar el saldo de las mismas, **es indiscutible que uno y otro pronunciamiento cabe hacerlo en distintas fases, autónomas e independientes**, como así se consagra, para cuando hay oposición, en el Código de Procedimiento Civil, antes y después de la reforma introducida por el decreto 2282 de*

1989 (artículos 432 y 433, hoy 418 y 419). La primera de naturaleza declarativa, concebida para mero declarar la obligación de rendirlas, porque como ya se anotó, esta surge o la impone la propia ley o el contrato, y la siguiente de condena, dirigida exclusivamente a establecer el quantum o valor de la obligación declarada en la etapa antecedente. De ahí que el numeral 3º del artículo 418, antes artículo 432, establece que 'Si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, el punto se resolverá en la sentencia...'; y que 'si en ésta se ordena la rendición', el demandado las presentará en el término prudencial que el juez le señalará, de las cuales se dará traslado al demandante, y si éste formula objeciones, 'se tramitaran como incidente que se decidirá mediante sentencia, en la cual se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago' "1.

Como se ve de la anterior descripción, válida también en el esquema del Código General del Proceso que conservó esa estructura, la primera fase o estadio es de naturaleza declarativa, y ella, cuando se presenta resistencia, culmina con sentencia que esclarece si hay o no lugar a rendir cuentas. Así lo señala el numeral 4º del artículo 379 del Código General del Proceso: "*Si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, **sobre ello se resolverá en la sentencia**, y si en esta se ordena la rendición, se señalará un término prudencial para que las presente con los respectivos documentos*" (se destaca).

La segunda parte del proceso de rendición provocada de cuentas, consiste en establecer el saldo que se adeuda, y para tal cometido, el legislador, específicamente, cuando se presente objeción, previó un trámite incidental, que se define mediante auto, pues al decir del numeral 5º del artículo 379 *ibídem*,

*"De las cuentas rendidas se dará traslado al demandante por el término de diez (10) días en la forma establecida en el artículo 110. Si aquel no formula objeciones, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a favor de cualquiera de las partes. Este **auto** no admite recurso y presta mérito ejecutivo. Si el demandante formula objeciones, se tramitarán como incidente y en el auto que lo resuelva a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago".*

¹ SC, 26 feb. 2001, exp. C-5591 y AC, 10 oct. 2012, rad. 2011-01988-00

Visto lo anterior, indudable resulta que en la causa nos encontramos en la segunda parte del proceso, frente a la cual en la citada providencia también se dijo: *“En ejercicio de sus competencias, esta Corporación ha tenido la ocasión de conceptuar sobre algunos aspectos del trámite mencionado, señalando que su propósito es “saber quién debe a quién y cuánto”, “cuál de las partes es acreedora y deudora”, “declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la otra, lo cual equivale a condenarla a pagar la suma deducida como saldo”*.²

Se sigue de lo dicho, que ante la orden de presentar cuentas dada a la demandada en sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta (páginas 64 y 65 archivo 3 C-1 y audio 3 carpeta Audiencia 373 C-1), sentencia confirmada por este Tribunal en providencia de fecha 22 de abril de 2019 (páginas 79 archivo 3 C-1); debía la demandada rendir cuentas, y como bien lo anotó el señor juez a quo, rendir cuentas es mucho más que simplemente presentar un balance con sus partidas de activo y pasivo, ya que el verdadero cometido en esta clase de procesos es develar la realidad de las mismas, siendo imposible pensar que el propósito del proceso se atienda con presentar la cuenta y no más.

En este proceso, la demandada dijo haber presentado cuentas según informe visible en las páginas 86 a 101 C-3, anexando 7 AZ de soporte de gastos (carpeta rendición de cuentas); empero ha de recordarse que la génesis de la controversia es el contrato de operación minera suscrito entre las partes el 8 de junio del año 2013 donde en el numeral 4 de la cláusula sexta (página 5 archivo 01) las partes pactaron: *“**la utilidad neta** obtenida por la comercialización de los minerales extraídos ya sea en boca de mina o de la*

² Sentencia de 23 de abril de 1912, XXI, 141; reiterada en Sc, 26 feb. 2001, exp. C-5591 y AC, 10 oct. 2012, rad. 2011-01988-00.

*trituration o de la transformación de los mismos, **será distribuida por partes iguales entre EL CONCESIONARIO Y EL OPERADOR, es decir el 50% para cada una de las partes. La utilidad neta es aquella que arrojen los estados financieros de la operación en la cual se deducen los costos y gastos pago de pólizas, transferencias de regalías que se generan en la etapa de explotación y comercialización. El CONCESIONARIO Y EL OPERADOR efectuarán mensualmente la liquidación de utilidades y se entregará a cada una de las partes lo que le corresponda en el porcentaje acordado”** (Resaltado y subrayado por el Tribunal)*

Visto que, la entrega de utilidades dependía de los estados financieros, de la parte a quien se ordenó rendir cuentas, esto es, la demandada, era a ésta a quien le correspondía allegar tales estados financieros para de ellos determinar las utilidades netas y así poder establecer que debía pagar a los demandantes, eso sí resultaban utilidades netas; empero advierte el Tribunal que de la documentación allegada por la demandada, salta a la vista que ni siquiera se puede establecer si se trata de estados de financieros, los que por demás deben cumplir con las normativas legales, nótese que lo allegado por la demandada son simples informes con unos presuntos soportes presentados por la gerente general en los cuales no se definen las utilidades netas (carpeta rendición de cuentas).

Se sigue de lo dicho que, si la demandada no contaba con los estados financieros, no podía establecer las utilidades netas y así determinar cuánto debía pagara a los demandantes, si había lugar a ello.

Alega la sociedad apelante, que el origen de la controversia tiene que ver con un contrato de operación minera entre los demandantes y la demandada, sin que ello implique una sociedad comercial ni que los demandantes sean socios

(archivo 45 C-1); empero advierte el Tribunal que la demandada se denomina TRANSPORTES Y AGREGADOS J.H. S.A.S. (página 19 archivo 1 C-1), esto es, sociedad por acciones simplificada y así los demandantes no sean socios de la demandada deben cumplir con la normatividad comercial ya que en su objeto social se indica “LA SOCIEDAD DESARROLLARÁ CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO” (página 21 archivo 1 C-1), empero lo más relevante es que al margen de la discusión planteada por la apelante, esto es, que la demandada sea o no sociedad comercial o que los demandantes sean socios o no de esa sociedad, la base de la litis es el contrato de operación minera donde los contratantes acordaron distribuir la utilidad neta por partes iguales, especificando que “*La utilidad neta es aquella que arrojen los estados financieros de la operación*”, y como se vio los estados financieros no fueron presentados, y por ende en la práctica no hubo rendición de cuentas.

De otro lado, la demandada alega en su recurso (archivo 45 C-1) que el dictamen pericial visible en el archivo 16, no cumple con los requisitos del artículo 226 del C.G.P.; no obstante, en punto a los requisitos y valoración de dictamen pericial la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC2066-2021, de 3 de marzo de 2021, radicación No. 05001-22-03-000-2020-00402-01, M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque, expuso:

“2. En lo que puntualmente concierne al dictamen pericial, este tiene por objeto llevar al juez información cuando el campo del conocimiento del que se extraiga no sea de su dominio, puesto que con él es posible obtener un concepto fundado en el método científico, el arte o la técnica; cuyas conclusiones incidirán en la adopción de la decisión que dirima el conflicto planteado, según lo dispone el artículo 226 del Código General del Proceso.

(...)

También, dicha probanza deberá contener unas exigencias mínimas que deben dar cuenta de tres elementos: *los fundamentos, la imparcialidad y la idoneidad de quien lo elaboró*. Así lo señala el artículo 226 del compendio, cuando en lo pertinente indica:

(...)

En lo que respecta a su decreto, con miramiento en el artículo 168 *ibidem*, regla general y, por tanto, aplicable a cualquier medio de prueba, el juez rechazará la que encuentre ilícita, notoriamente impertinente, inconducente y la manifiestamente superflua o inútil. Todo lo cual realizará con la debida motivación.

Ya en punto de la contradicción, el litigante contra el cual se aduzca podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de instrucción y juzgamiento, aportar otro o realizar ambas actuaciones, con sujeción a las reglas estipuladas en el canon 228.

Por último, terminada esta fase y escuchados los alegatos finales de las partes, cuando a ello haya lugar, el fallador apreciará el dictamen en su sentencia; labor que emprenderá de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la que evaluará la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso (art. 232).

Es este el momento, entonces, en el que se deberá examinar con rigor el trabajo pericial en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa. Dicho de otra manera, es aquí que se escudriña la imparcialidad e idoneidad del experto, así como la fundamentación de la investigación y sus conclusiones. No antes.

De modo que **el análisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el citado precepto 226 corresponde a una actividad propia del momento en que se dirime la controversia, razón por la cual la ausencia de los mismos no da lugar al rechazo automático de dicho medio de convicción**. Esto es, a que se impida su ingreso al proceso, puesto que los únicos motivos que llevan a esa determinación son los referidos en el artículo 168 *ídem*, huelga reiterar, respecto de «*las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles*». Y no existe disposición especial en materia de experticia que autorice excluir la prueba por esa razón.

(...)

Lo mismo se extrae de una lectura cuidadosa del Código General del Proceso. Ciertamente en el artículo 235, al reglamentar lo concerniente a la «*imparcialidad del perito*», se estipuló:

El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito.

*El juez **apreciará** el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso **negarle efectos al dictamen** cuando existan circunstancias que **afecten gravemente su credibilidad.***

*En la **audiencia** las partes y el juez podrán **interrogar al perito** sobre las circunstancias o razones que puedan comprometer su imparcialidad (...) (Negrillas y subrayas de ahora).*

Como puede ser visto, en lo que respecta a uno de los aspectos trascendentales de la experticia, como lo es la imparcialidad de quien la elabore, el legislador es diáfano en mostrar que dicho aspecto, de un lado, podrá ser objeto del interrogatorio del perito (contradicción en audiencia) y, del otro, será «*apreciado*» en el fallo, al punto que, en el evento en el que encuentre circunstancias que afecten gravemente su credibilidad, podrá negarle efectos a la misma. Todo lo cual sucede luego de que se decrete la prueba y se permita su incorporación al plenario.

En definitiva, a pesar de que la credibilidad de la pericia depende de la solidez de sus conclusiones, de la imparcialidad e idoneidad del perito, **el juez no está facultado para sacar automáticamente del acervo el informe arrimado con defectos en tales presupuestos porque las falencias o carencias del dictamen no son motivos suficientes para impedir su recaudo**, pues ese análisis está reservado para la sentencia, donde deberá motivarse de qué manera esas omisiones disminuyeron la verosimilitud del informe. (Resaltado por el Tribunal).

Observando la anterior nota jurisprudencial, advierte el Tribunal que en audiencia del 24 de agosto de 2023 (archivo 42 C-1), el señor juez advirtió que el dictamen no cumplía con las previsiones del artículo 226 del C.G.P, y por ello interrogó a la perito que lo elaboró, quien informó que es contadora pública hace 4 años; que ha trabajado para propiedades horizontales y también para una asociación como revisor fiscal; que en la documentación aportada no encontró

ningún estado financiero; que era el primer peritaje judicial que presentaba; que los contadores están preparados para ser revisores fiscales; que no está incurso en ninguna de las causales previstas en el artículo 50 del C.G.P.; que con la documentación aportada no encontró nada de contabilidad ni de facturas legales para soportarlo y así poder declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión; que el dictamen se hizo con los documentos que entregaron a la apoderada de los demandantes, documentos que la sociedad demandada había entregado al juzgado; y que tuvo apoyo de su asistente contable para elaborar el dictamen, dado el volumen de los documentos que fue necesario revisar.

Como se aprecia, con el interrogatorio hecho a la perito no quedó en duda su credibilidad, imparcialidad e idoneidad, aspectos que no logró desvirtuar la sociedad demandada, por el contrario nótese que la citada, acreditó ser contadora publica (página 5 archivo 16 C-1), tener experiencia en revisoría fiscal, sumado a que la conclusión en su dictamen, esto es, que los documentos entregados por la demandada *“no se encuentran debidamente respaldados contablemente y NO son un rendición de cuentas, ni constituyen una contabilidad para ningún ente de orden de control fiscal”*, en nada se aleja a lo analizado líneas atrás en cuanto a que la demandada no allegó los estados financieros, los cuales no se pueden tener por suplidos con la documentación presentada por ésta, dado que tal documentación a pesar de lo voluminosa, se reduce a informes presentados por la gerente general en los cuales no se definen las utilidades netas (carpeta rendición de cuentas), huelga reiterar que rendir cuentas no se reduce a presentar un balance con activos y pasivos.

Y si bien la apelante alega que, la perito *“solo tuvo en cuenta lo aportado por la abogada”*; salta a la vista que lo aportado por la abogada a la perito, fue la

documentación obrante en las 7 AZ que allegó con el escrito con el que pretendía acreditar que había rendido cuentas a los demandantes, dado que a tal documentación se refirió la perito en su dictamen.

Cabe mencionar que, la demandada no cumplió las previsiones del artículo 228 del C.G.P., valga decir, “... *solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones*”, aspecto definido por la entonces señora juez a quo en providencia del 25 de abril de 2023 (archivo 39 C-1).

Finalmente, la sociedad demandada en su recurso alega que no se tuvo en cuenta que el objeto del contrato era obtener CALCITA, la cual nunca se encontró y que la parte demandada subsidió gastos con bienes propios de la sociedad al punto que hoy está en estado de liquidación; manifestación frente a la cual advierte el Tribunal que en el proceso de rendición de cuentas no se discute lo planteado por la apelante, máxime cuando tal controversia fue debatida en otro escenario judicial como da cuenta la sentencia de 16 de enero de 2019 proferida en dicho proceso (páginas 186 a 201 archivo 3 C-1).

Así las cosas, concluye el Tribunal, que la sociedad demandada, no rindió las cuentas ordenadas en la sentencia que le impuso tal obligación, por lo que prospera la objeción presentada por los demandantes, y como la providencia apelada comporta tal decisión la misma debe ser confirmada, se condenará en costas a la apelante (art. 365 – 1° C.G.P.).

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado, esto es, el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta, el día 24 de agosto de 2023.

SEGUNDO: Condenar a la apelante al pago de costas de la presente instancia. Líquidense por el juzgado de primera instancia, con base en la suma de \$1.000.000, como agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY

Magistrado

Firmado Por:
Pablo Ignacio Villate Monroy
Magistrado
Sala Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **64dc71b4d5de32f144d39cddb4cf317e819e6375208656b329877802fd32b012**

Documento generado en 05/02/2024 04:27:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>